



**Francisco Simón Francisco**  
**Auxiliar de Investigación**

### **Migración: estrategia de sobrevivencia**

El comisionado de la Patrulla de Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), Kevin K. McAleenan, realizó una gira de trabajo de seis días, entre el 24 y 30 de septiembre del año 2018, a los tres países que conforman el denominado “Triángulo Norte”: Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo de la gira fue “indagar sobre las causas del fenómeno migratorio y la relación que existe entre éste y la violencia y la pobreza”. (Prensa Libre, 24/09/2018)

La visita se realizó en el marco de la búsqueda de explicaciones del posible fracaso del Plan Alianza para la Prosperidad, que tiene como objetivo establecer condiciones para mantener el arraigo de las poblaciones en sus territorios, a través de una estrategia construida sobre cuatro pilares: a) fortalecimiento de los aparatos de seguridad y justicia; b) lucha contra la corrupción; c) generación de oportunidades de inversión y, d) mejoras en la recaudación de impuestos; los cuales, de alguna manera, explican las prioridades en los gobiernos de los tres países, con distintos niveles de aplicación y resultados en los últimos tres años.

Cabe mencionar que el Plan Alianza para la Prosperidad surge como una respuesta frente a las nuevas causas que explican las emigraciones, y una de éstas lo constituyen los actos de corrupción que se comenten en las instituciones del Estado, por lo que las acciones se han centrado en el

fortalecimiento de la institucionalidad y en el acceso a la seguridad y la justicia, procesos que quedaron débiles precisa y paradójicamente ante la implementación de políticas de ajuste estructural, dictadas por el Consenso de Washington y la imposición de acuerdos comerciales globalizadores que rompieron las barreras de protección que existían hacia la producción alimentaria nacional y erigieron muros para evitar las migraciones hacia Estados Unidos.

En los últimos años la migración guatemalteca tiene más rostro rural, indígena, campesino, de niños, jóvenes y mujeres. Se ha incrementado lejos de atenuarse, al extremo que, en noviembre de 2014, se declarara una crisis humanitaria, porque Estados Unidos no podía contener los grandes contingentes de niños, niñas y adolescentes, que se acogían al sistema de protección identificado como Central American Minors, que mandataba que los niños de los países de la región no fueran inmediatamente deportados.

En 2014, además, para minimizar las emigraciones se fraguó el Plan Alianza para la Prosperidad. A pesar de que este Plan contempla el eje de generación de inversión para desarrollar el capital humano, no se ha podido visibilizar la disminución de la migración, principalmente aquella procedente de Guatemala, que se cuadruplicó y superó las estadísticas de países como El Salvador y Honduras.

Al 4 de octubre de 2018 han sido deportados desde Estados Unidos 38, 995 migrantes guatemaltecos, cifra que supera a los 28,464 registrados en 2017 y a la de 26,097 del 2016, evidenciando diversas perspectivas: 1) que las poblaciones guatemaltecas siguen buscando en Estados Unidos mejores oportunidades, a pesar de los riesgos y el alto precio que se debe pagar para realizar el viaje; 2) el fracaso de los planes de prosperidad impulsados por Estados Unidos para contener las migraciones; 3) que los proyectos mineros, palmeros y de

# IIPS-USAC

Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales  
“Dr. René Poitevin Dardón”

Escuela de Ciencia Política / USAC

IIPS OPINA No. 14/11-10-2018

agroexportación, así como la generación de planes de infraestructura no impactan consistentemente en la mejora de condiciones de vida; y, 4) que las deportaciones obedecen a la poca capacidad y atención que ha dado el Estado guatemalteco para plantear una política migratoria integral que responde a las necesidades básicas de población.

La sequía, el cambio climático y el hambre, más el alto grado de violencia provocada por el crimen organizado, son situaciones cotidianas a las que se enfrentan las poblaciones rurales y urbanas, particularmente en las regiones del occidente, del corredor seco y la región fronteriza del país. A partir de esta drástica realidad, la población decide sumarse a la dinámica migratoria, considerando que ésta es el último recurso que existe en busca de mejores condiciones de vida y estrategias de sobrevivencia.

Frente a esta problemática, el Estado debe asumir, tal y como le corresponde: 1) la inversión en el campo, propiciando el desarrollo rural y la dotación de tierras y oportunidades a los campesinos, revalorizando su producción; 2) la inversión en sistemas de prevención de sequías; 3) retomar el papel en cuanto a la promoción de una agricultura para la generación de alimentos.

